



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-008-2018-0143-01
Demandante:	Lucia Ramírez de Jaramillo
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Incrementos Pensiones -Vigencia -

**Medellín, abril nueve (9) de dos mil veintiuno (2021)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de octubre de 2020, en el proceso Ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora LUCIA RAMIREZ DE JARAMILLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-008-2018-00143-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora LUCIA RAMIREZ DE JARAMILLO, instauró demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo que se declare que en calidad de pensionada por vejez, tiene derecho a percibir los incrementos por su cónyuge a cargo, señor LUIS CARLOS JARAMILLO PUERTA, desde la fecha en que obtuvo el derecho a la pensión, 01 de septiembre de 1998, en consecuencia se condene a Colpensiones al pago de los incrementos pensionales de un 14%, con los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como supuestos fácticos relevantes expuso que contrajo matrimonio Católico, el 1 de mayo de 1965, con el señor Luis Carlos Jaramillo Puerta, quien ha dependido y depende económicamente de ella; que mediante Resolución No. 010525 de 1998, el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez. a partir del 01 de septiembre de 1998 en cuantía de \$273.633.00, solicitando el 18 de diciembre de 2014 a Colpensiones le fuera reconocido el incremento pensional por persona a cargo sin que a la fecha de presentación de la demanda Colpensiones haya dado respuesta a la solicitud.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, COLPENSIONES dio respuesta al escrito impulsor, indicando frente a los hechos que es cierto el estatus de pensionada por vejez de la actora, mediante Resolución N° 010525 de 1998, a partir del 01 de septiembre de 1998 y la cuantía de la misma, no le consta el vínculo matrimonial ni la dependencia económica del cónyuge de la demandante, la cual, afirma, deberá establecerse en el debate probatorio

Se opone a las pretensiones de la demanda y formula las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer incrementos pensionales; improcedencia de los intereses moratorios; prescripción; imposibilidad de condena en costas; compensación y la excepción genérica.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, decide el litigio mediante fallo proferido el 15 de octubre de 2020, en el cual ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora LUCÍA RAMÍREZ DE JARAMILLO y condena en costas a la actora en favor de la demandada.

La sentencia no apelada por las partes, siendo remitida en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la accionante.

### **1.4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, ninguna de las partes emitió pronunciamiento.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1 PROCEDENCIA DE LA CONSULTA**

Procede la consulta en favor del accionante, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone: “Las *sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente*

*adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.”*

## **2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA**

Se encuentra que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos:

-Que a la señora LUCIA RAMIREZ DE JARAMILLO, le fue concedida la pensión de vejez, mediante Resolución 010525 del 28 de septiembre de 1998 bajo el régimen de transición y con fundamento en el decreto 758 de 1990. (01.Expedientecompleto.pdf. folio 10)

- Que la demandante contrajo matrimonio católico con el señor LUIS CARLOS JARAMILLO PUERTA, el 01 de mayo de 1965. (01.Expedientecompleto.pdf. folio 12)

-Que la actora presentó la reclamación de la prestación complementaria de incrementos pensionales el 18 de diciembre de 2014. (01.Expedientecompleto.pdf. folio 06)

## **2.3. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER**

Deberá la Sala determinar:

¿Si la sentencia objeto de consulta se encuentra ajustada a la legalidad, verificando si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por cónyuge a cargo, consagrados en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990?

## **2.4. TESIS:**

El problema jurídico se resuelve por esta Sala de Decisión, bajo la tesis según la cual a la demandante no le asiste derecho al reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo, por cuanto los mismos fueron derogados por la ley 100 de 1993, conforme lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU140 de 2019, y por lo tanto la sentencia debe ser CONFIRMADA.

## **2.4. PREMISAS NORMATIVAS**

Los incrementos pensionales por personas a cargo, son una prestación complementaria a la pensión de vejez e invalidez de origen común, que nace con una finalidad social y solidaria, como lo es contribuir con el pensionado que tiene a cargo a su cónyuge, compañera o compañero permanente y/o hijos en un porcentaje del en un 14% o 7%, respectivamente, sobre la pensión mínima.

Fueron creados en el sistema de seguros sociales, que rigió con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y desde el Acuerdo 244 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, siendo el último estatuto que los consagró el Decreto 758 de 1990. No fueron contemplados en los estatutos legales especiales, como la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

En el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, el legislador tampoco incorporó esta prestación como parte del nuevo régimen, fecha desde la cual se ha discutido la vigencia de los incrementos pensionales a partir del 01 de abril de 1994.

Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió la controversia, desde la sentencia del SL, Rad 25517 del 27 de julio de 2005, reiterada en las sentencias SL, Rad 29751 del 5 de diciembre de 2007, en los siguientes términos:

*“No obstante los importantes razonamientos de la censura, no hay lugar a que esta Corporación entre a modificar la posición jurisprudencial que antecede y por el contrario en esta ocasión merece su ratificación.*

*(...)*

*En este orden de ideas, al no disponer la Ley 100 de 1993 nada respecto de los incrementos de marras, los cuales de acuerdo a lo atrás expresado no pugnan con la nueva legislación, es razonable concluir como lo hizo el ad quem, que dicho beneficio se mantiene en vigor; se insiste, para el afiliado que se le aplique por derecho propio o por transición el aludido Acuerdo 049 de 1990.*

*Lo expuesto trae consigo para el caso en particular, que el derecho a los incrementos por la esposa e hijos menores al reconocerle la pensión de vejez con base en la normatividad anterior al ser beneficiario del régimen de transición, aunque se hubieren completado los requisitos para acceder a la prestación en vigencia de la nueva ley de seguridad social, -- 9 de diciembre de 2001--, no es dable desconocer tal derecho, al estar previsto en el ameritado Acuerdo del ISS, cuando frente a dichos incrementos según se dijo, no operó la supresión o derogatoria expresa o tácita de la ley (artículos 71 y 72 del Código Civil), por virtud a que sus efectos en verdad jurídicamente no fueron abolidos, conservándose así su aplicación inobjetable en los términos del aludido artículo 31 de la Ley 100 de 1993, lo que de igual manera encuentra respaldo en la protección a la seguridad social que pregonan los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. (...).” (Subrayas de la Sala)*

En igual sentido se pronunció la misma Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia en sentencia SL, Rad 32381 del 24 de febrero de 2009, SL, Rad 36345 del 02 de agosto de 2010, SL, Rad 40919 del 18 de septiembre de 2012 y SL, Rad 42300 de 18 de septiembre de 2012, SL 1585, Rad 57367 de 2014 y SL 1585, Rad 45197 de 2015.

Igualmente el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, estableció la vigencia de los incrementos, véase sentencias T791 de 2013, T748 de 2014, T123 de 2015, T541 de 2015, T038 de 2016, T217 de 2013, T831 de 2014, T319 de 2015, T369 de 2015, T395 de 2016, T460 de 2016

También el Consejo de Estado en el expediente radicado 11001-03-25-000-2008-00127-00 (2741-08) del 16 de noviembre de 2017, mediante la cual resolvió acción de nulidad del artículo 21 del decreto 758 de 1990, y estableció que estos no fueron derogados por la ley 100 de 1993.

No obstante, posteriormente en la sentencia T746 de 2018, la Corte Constitucional, sostuvo por primera vez, la derogatoria de los incrementos a partir de la vigencia del Sistema General de Pensiones y finalmente la Sala Plena de la Corporación zanja la discusión a través de la sentencia SU 140 del 28 de marzo de 2019 en la cual, mayoritariamente, concluyó la derogatoria orgánica de los incrementos pensionales a partir del 01 de abril de 1994, al indicar:

*“Lo anterior debe ser suficiente para que la Corte concluya que los incrementos previstos en el artículo 21 del decreto 758 de 1990 fueron orgánicamente derogados a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993. Ciertamente ante la regulación integral y exhaustiva en materia pensional que hizo la ley 100, no cabe sino concluir la derogatoria orgánica del régimen anterior (ver supra 3.1.2-3.1.4)*

*Para la Corte es innegable que el artículo 21 del decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho con posterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respecto que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la expedición de la ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el derecho al incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21.”*

## **2.6. CASO CONCRETO**

En este caso la demandante nació el 23 de mayo de 1943, cumplió la edad mínima pensional el 23 de mayo de 1998, (01.Expedientecompleto.pdf. folio 09) y la pensión le fue reconocida mediante Resolución N° 010525 de 1998, a partir del 01 de septiembre de 1998, habiéndose causado su derecho con posterioridad al 01 de abril de 1994, data para la cual había perdido vigencia el artículo 21 del Decreto 758 de 1990.

Ahora, si bien, la tesis actual de la Corte Constitucional no se ajusta a la sentencia proferida por el Consejo de Estado, ni a la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la vigencia de los mismos, que fue recientemente reiterada en sentencia SL 2334 del 11 de junio de 2019, por la Sala de Descongestión presidida por el magistrado SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, considera esta Sala de Decisión que debe acogerse el precedente vertical del Tribunal Constitucional, siendo este el órgano de cierre en la interpretación constitucional del ordenamiento jurídico y en virtud de la obligatoriedad de su precedente. (Véase sentencias SU 354 y SU 611 de 2017, SU068 de 2018 y T109 de 2019).

Así las cosas, la sentencia que se revisa en consulta, se encuentra acorde con la jurisprudencia vigente y en consecuencia debe ser CONFIRMADA.

## **3. DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

**FALLA:**



1.- Se **CONFIRMA** la sentencia objeto de consulta proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de octubre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUCIA RAMIREZ DE JARAMILLO en contra de COLPENSIONES.

2.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente y el audio al Juzgado de origen

El fallo anterior queda notificado a las partes por Estados, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

La presente providencia fue notificada por estado No. **59** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 12 de abril de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario